

Instituto de Investigaciones Gino Germani

VII Jornadas de Jóvenes Investigadores

6, 7 y 8 de noviembre de 2013

Nombre y Apellido: Nicolás Alles

Afiliación institucional: Universidad Nacional del Litoral - CONICET

Correo electrónico: nicolas.alles@gmail.com

Eje problemático: Democracia y Representación.

Título de la ponencia: El problema de la legitimidad en la democracia deliberativa.

El problema de la legitimidad en la democracia deliberativa

Nicolás Alles

Universidad Nacional del Litoral – CONICET

I. Introducción

Entre las investigaciones sobre los fundamentos de la concepción deliberativa de la democracia, el problema de la legitimidad de las decisiones políticas adquiere una importancia innegable. Hay quienes sostienen incluso que este modelo normativo es básicamente una propuesta de legitimidad para la toma de decisiones (Martí, 2006:3). A diferencia de los enfoques de las ciencias sociales, la concepción de legitimidad que presentan las distintas versiones de este modelo normativo se caracterizan por ser fundamentalmente prescriptivas.

Fabienne Peter (2009) considera a la legitimidad democrática como un concepto normativo distintivo que hace referencia a las condiciones que deben aplicarse a la toma de decisiones democráticas. Desde esta perspectiva, la legitimidad significa la autorización para utilizar el poder político. Esto además implica otros dos conceptos, íntimamente relacionados: el de autoridad y el de obligación políticas. Aquel hace referencia al derecho a gobernar, mientras que éste refiere a obligaciones correlativas a aquella autoridad en la medida en que especifican deberes de aceptar el derecho a gobernar y a actuar acorde al mismo (Peter, 2009: 57). El problema de la legitimidad es entonces cómo justificar una autoridad que pueda reclamar la obligación política de aquellos que se encuentran sujetos a la misma. Esta justificación no es sino progresiva. Como lo nota José Luis Martí (2006), la legitimidad es una característica gradual del procedimiento de tomas de decisiones. Esto es, el grado de legitimidad de cada procedimiento dependerá de cuántas condiciones pueda satisfacer y cómo ha de satisfacerlas.

Los distintos planteos de la democracia deliberativa concernientes a la cuestión de la legitimidad se centran, entonces, en esto: precisar las condiciones que deben cumplirse para producir un resultado justo y políticamente vinculante. En lo que sigue nos centraremos en perspectivas de la democracia deliberativa que juzgan que la legitimidad emana en algún sentido del procedimiento de deliberación. Las propuestas

de Jürgen Habermas, Joshua Cohen y Thomas Christiano que intentaremos analizar aquí se podrían clasificar como casos en donde la legitimidad surge del procedimiento de deliberación. Antes de avanzar quizás convenga una palabra sobre el significado del procedimiento en el planteo de este modelo normativo que estamos analizando. El que la cuestión de la legitimidad se piense a partir de cuestiones procedimentales no significa que esta propuesta prescriptiva pueda reducirse a un procedimiento. Si bien éste es esencial en el momento de diseñar y regular la deliberación, este modelo se asienta en la valoración de la deliberación como parte esencial de la democracia. A partir de la deliberación (que tampoco es nueva en el pensamiento democrático: se puede encontrar ya en sus orígenes griegos) es posible pensar un nuevo rol del ciudadano y del espacio público. La democracia deliberativa implica una preocupación sustantiva que apela a un procedimiento para instrumentalizar el valor de la deliberación.

La hipótesis que intentaremos demostrar es que estos ensayos de justificación procedimental presentan limitaciones al considerar el problema de la legitimidad de las decisiones democráticas tomadas de manera deliberativa.

II. Legitimidad, deliberación y procedimiento.

¿Qué significa que los modelos de legitimidad deliberativa propuestos (Cohen, Habermas y Christiano) se caractericen como procedimentalistas? En términos generales, significa que en la deliberación se encuentra la fuente de legitimidad de las decisiones políticas. Pero precisando aún más esta afirmación convendría preguntar, ¿cómo es que se relaciona legitimidad, deliberación y procedimiento? ¿Qué aspectos del procedimiento deliberativo contribuyen a dotar de legitimidad a las decisiones democráticas? En los autores mencionados existe la convicción, con diferencias entre ellos, según la cual la deliberación se considera un procedimiento que debe adecuarse a algunas condiciones para producir decisiones legítimas. El diseño del procedimiento deliberativo debe cumplir requisitos para poder producir resultados legítimos. Esta posición, contrariamente a lo que sostienen algunos críticos a esta iniciativa, no significa necesariamente la búsqueda incondicionada de consenso. Las perspectivas analizadas no creen que sólo las decisiones que emanan de un consenso pueden aspirar a ser legítimas. Una situación tal no sólo es improbable en la práctica concreta, sino que

también no está vislumbrada por la teoría deliberativa. Desarrollaremos esto más adelante.

Volvamos a la pregunta recientemente planteada. ¿Cómo se relacionan legitimidad democrática y deliberación? O mejor: ¿en qué puede contribuir la deliberación para mejorar los planteos de legitimidad democrática? Los deliberativistas sostienen que la deliberación puede aumentar la calidad racional de los resultados (Habermas, 1998) o incluso que puede generar resultados más justos (Christiano, 1999). Según estos autores, la discusión de las cuestiones públicas entre ciudadanos libres e iguales puede generar un mejor resultado en términos racionales o de justicia que aquellas decisiones que son tomadas por medio de una simple negociación o mediante el voto sin previa discusión. Para que la deliberación pueda dar cuenta de esta expectativa de mejorar la calidad de las decisiones democráticas es necesario diseñar un procedimiento deliberativo que pueda producir el mejor resultado posible.

Los autores a los que nos dedicamos parten de una consideración general sobre la deliberación o sobre el significado de ella. El diseño del procedimiento resulta así un reflejo de aquella consideración acerca de la deliberación, y encarna el valor de ésta. Todos los planteos suelen coincidir en algunos puntos importantes. En primer lugar, hay referencias a la realidad del pluralismo valorativo como instancia irreductible de la sociedad contemporánea. En segundo lugar, la deliberación encarna alguna forma particular de racionalidad: ésta es fundamental para pensar la justificación de las decisiones políticas. En tercer y último lugar, todos parecen coincidir en que la deliberación representa un avance con respecto a los mecanismos de agregación: justificar las posiciones es mejor estrategia prescriptiva que la mera agregación de preferencias dadas. La democracia deliberativa provee formas de democratización del espacio público; aporte que por más ingenuo que aparezca a la vista de los realistas contemporáneos no deja de intentar recuperar ciertas nociones caras a la tradición del pensamiento democrático, sobre todo, la participación de los ciudadanos en la cosa pública.

III. Estrategias procedimentales

Cohen y el procedimentalismo ideal

Joshua Cohen (1999a), en un artículo pionero sobre la democracia deliberativa, propone un “procedimiento deliberativo ideal”. En ese ensayo sostiene que “[l]a caracterización de este procedimiento provee un modelo abstracto de deliberación el cual vincula el ideal intuitivo de la asociación democrática con una concepción más sustantiva de la democracia deliberativa” (p. 67). Este modelo ideal que propone Cohen se desprende de una determinada caracterización de la deliberación política. Destacaremos de esta “concepción formal de la democracia deliberativa” apenas dos aspectos que hacen referencia a la cuestión de la legitimidad de las decisiones tomadas mediante el procedimiento deliberativo. En esta caracterización puede leerse:

“Los miembros de la asociación comparten (y es de público conocimiento el hecho de que comparten) la perspectiva de que los términos apropiados de asociación proveen el marco para o son el resultado de su deliberación. (...) Para ellos, la deliberación libre entre iguales es la base de la legitimidad.” (Cohen, 1999a: 72)

Y más adelante:

“Debido a que los miembros de la asociación democrática consideran el procedimiento deliberativo como la fuente de *legitimidad*, es importante para ellos que los términos de su asociación no sean solamente el resultado de su deliberación sino también que sean *manifiestos* para ellos como tales. Ellos prefieren instituciones en las que la conexión entre deliberación y resultados sean evidentes a aquellas en las que esa conexión es menos clara.” (Cohen, 1999a: 74)

El procedimiento deliberativo ideal que propone Cohen intenta capturar el principio según el cual los resultados son democráticamente legítimos si y sólo si pueden ser el producto de un acuerdo libre y razonado entre iguales. Este procedimiento no pretende guiar una discusión espontánea entre los ciudadanos, sino que apunta a proponer aspectos de un diseño institucional en el que se refleje el ideal deliberativo y su perspectiva de legitimidad.

En “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”, Cohen sigue sosteniendo que

“la idea fundamental de la legitimidad democrática es que la autorización para ejercer el poder estatal debe surgir de las decisiones colectivas de los miembros de esa sociedad gobernada por ese poder. Más precisamente esa autorización surge de la discusión y decisiones de los miembros, tomadas dentro y expresadas a través de instituciones políticas y sociales, diseñadas para reconocer su autoridad colectiva”. (Cohen, 1999b: 407)

También sigue sosteniendo que la democracia deliberativa es el medio para institucionalizar el ideal de justificación política mediante el razonamiento público entre iguales. Lo nuevo aquí es la aparición de tres principios que conectarían a la democracia deliberativa con la protección de las así llamadas libertad de los modernos. Esos tres principios son presentados como el de inclusión deliberativa, el de bien común y el de participación. El primero exigiría que no sólo se les de igual consideración a los intereses de todos, sino demanda además que encontremos razones políticamente aceptables para otros dado el trasfondo de diferencias de convicciones de conciencia (Cohen, 199b, 417). Según el principio del bien común se destaca que los ciudadanos tienen buenas razones para rechazar un sistema de políticas públicas que falla al promover sus intereses. Por último, de acuerdo al principio de participación, la decisión colectiva –institucionalizando el vínculo entre la justificación deliberativa y el ejercicio del poder público– debe asegurar iguales derechos de participación, incluyendo derechos al voto, a la asociación y a la expresión política, con una fuerte presunción en contra de las restricciones del contenido de la expresión.

En el planteo de Cohen, estos principios no están vinculados expresamente a la problemática de la legitimidad, pero es posible inferir las implicancias que tienen para el planteo de la justicia de las decisiones políticas. Sobre todo si nos centramos en el último principio, el de la participación, podemos encontrar la preocupación por la correcta ampliación de la intervención de todos los involucrados en la toma colectiva de las decisiones democráticas. Si la legitimidad depende, en última instancia, de la deliberación, un requisito que amplíe la participación en esa deliberación produciría resultados aún más legítimos.

En el planteo de Cohen podemos distinguir dos momentos. Un primer momento caracterizado por el desarrollo de un procedimiento deliberativo ideal, el cual pretendía ser reflejado por las instituciones, pero sobre el que no había demasiadas precisiones acerca de los requisitos para la deliberación. La legitimidad de acuerdo a este primer

momento podría entenderse bajo lo que aquí proponemos denominar como *la tesis fuerte de la legitimidad procedimental*¹. La legitimidad emana de la deliberación y no existen restricciones sustantivas más allá de algunas precisiones al procedimiento. En el segundo momento, si bien *grosso modo* la concepción de la legitimidad permanece intacta, aparece ahora una preocupación por las libertades que si bien, como dijimos, el autor no conecta directamente con el problema de la legitimidad, ésta pueden tener repercusiones para pensar el problema de las decisiones legítimas. Los tres principios que agrega Cohen (el de inclusión deliberativa, el del bien común y el de participación) funcionan como requisitos para la deliberación y en tanto tales afectan el planteo de la legitimidad. Surge, de acuerdo a nuestra perspectiva, así una versión de la legitimidad un poco más matizada, una versión que podríamos denominar como *la tesis débil de la legitimidad procedimental*. La legitimidad emana de la deliberación pero existen ahora elementos sustantivos que intentan establecer algún límite para el procedimiento. En este caso, el límite serían las libertades de los modernos: la decisión sería legítima si emana de un procedimiento deliberativo que pueda reflejar y respetar esas libertades.

Habermas y la democracia discursiva

Nos centraremos ahora en delimitar algunos elementos importantes de la propuesta de Jürgen Habermas y su versión de la democracia deliberativa. En esta (Habermas, 1998, 1999) podemos encontrar tres tipos de presupuestos o, por lo menos, tres tipos de elementos que parecen encontrarse en el trasfondo de su propuesta democrática. Estos elementos son consideraciones de tres tipos: una política, una sociológica y una filosófica.

En primer lugar, Habermas entiende a su propuesta deliberativa (o como el mismo autor señala en varias oportunidades, “discursiva”) como el punto de cruce entre las dos tradiciones políticas más importantes: el liberalismo y el republicanismo. La

¹ Frente a nuestro intento de clasificar los distintos ensayos de justificación de la legitimidad conviene hacer aquí una aclaración. Fabienne Peter (2009) ensaya una extensa clasificación de las diversas estrategias de legitimidad de los distintos planteos de la democracia deliberativa tomando como referencia las distintas concepciones de la justicia procedimental que John Rawls estableciera en su *Teoría de la Justicia* y proponiendo a su vez una analogía entre las exigencias de la justicia procedimental y los planteos de legitimidad. Si bien consideramos semejante esfuerzo como valioso, en este trabajo hemos optado por proponer una clasificación personal y provisoria de los distintos modelos de legitimidad deliberativa. Las razones para apartarnos del modelo de Peter y ensayar uno propio radican en considerar que los modelos que aquí tratamos o no fueron demasiados atendidos por la autora (Cohen) o no coincidimos con las conclusiones finales sobre ellos (Habermas).

consideración discursiva de la democracia toma elementos de la tradición republicana y elementos de la liberal, y las conjuga de manera distinta.

“Cuando hacemos del concepto procedimental de la política deliberativa el núcleo normativo de la teoría de la democracia aparecen diferencias tanto en relación con la concepción republicana del Estado concebido como una comunidad ética, como en relación con la concepción liberal del Estado concebido como guardián de la sociedad centrada en el subsistema económico.” (Habermas, 1999: 239)

Esta particular reunión de liberalismo y republicanismo sirve como puntapié para la definición que el propio Habermas tiene de la democracia deliberativa.

“La teoría discursiva asume elementos de ambas partes [liberalismo y republicanismo] y los integra en el concepto de un procedimiento ideal para la deliberación y la toma de resoluciones. Este procedimiento democrático genera una interna conexión entre negociaciones, discursos de autocomprensión y de discursos referentes a la justicia, y cimenta la presunción de que bajo tales condiciones se alcanzan resultados racionales o equitativos. Con ello, la razón práctica se repliega desde la noción de los derechos universales del ser humano o desde la eticidad concreta de una comunidad determinada a aquellas reglas del discurso y formas de una comunidad determinada a aquellas reglas del discurso y formas de la argumentación que toman su contenido normativo de la base de validez de la acción orientada hacia el entendimiento, y, en definitiva, de la estructura de la comunicación lingüística.” (Habermas, 1999: 240)

El otro tipo de consideración que subyace a la democracia deliberativa habermasiana es como dijimos sociológico. Se trata de una faceta novedosa y única entre los deliberativistas. Mientras que la mayoría de los teóricos de la democracia deliberativa se dedican a precisar algunas cuestiones superficiales de la sociedad actual, Habermas, en un diálogo con la teoría de los sistemas, se ocupa de delinear algunos de los aspectos más notables de la sociedad contemporánea para la que piensa su propuesta normativa. Entre esos planteos destacan dos ideas complementarias. En primer lugar, la sociedad actual se encuentra descentrada, desmembrada en una serie de subsistemas

autónomos entre los cuales el sistema político es uno más y no necesariamente el más importante. En *Facticidad y validez* puede leerse:

“La procedimentalización de la soberanía popular y la vinculación retroalimentativa del sistema político con las redes (para él) periféricas que representan los espacios públicos políticos se corresponden con la imagen de una sociedad decentrada. En todo caso, esta concepción de la democracia ya no puede operar con el concepto de un todo social centrado en el Estado, al que quepa concebir como un sujeto en gran formato, que actúe orientándose a un fin.” (Habermas, 1998: 374)

Más adelante:

“En este aspecto la lectura que venimos efectuando de la democracia en términos de teoría del discurso, conecta con un tipo de consideración distanciada en términos de ciencia social, para el que el sistema político no es ni cúspide de la sociedad, ni tampoco el centro de la sociedad, ni tampoco un modelo de la sociedad a partir del que viniesen acuñadas las estructuras de ésta sino sólo *un* sistema de acción entre otros.” (Habermas, 1998: 378. Cursivas en el original)

La consideración filosófica que podemos encontrar en el planteo habermasiano hace referencia particularmente a la evaluación de la comunicación en general y de la deliberación en particular. Tal como lo manifiesta el autor y manteniendo un compromiso claro con los planteos del *pensamiento postmetafísico*, sostiene que su propuesta de la teoría discursiva se desmarca de las “figuras del pensamiento típicas de la filosofía de la conciencia” (Habermas, 1999: 242) las cuales pretendía asignar la práctica de la autodeterminación de los ciudadanos a un macro sujeto social (estrategia republicana) o bien referir el imperio de la ley a sujetos particulares que compiten entre sí (estrategia liberal). La postura habermasiana parece encontrar, de nuevo, un camino intermedio entre estas posiciones y se refiere a lo que podríamos denominar un nuevo tipo de intersubjetividad o, como sostiene su autor, una

“intersubjetividad de orden superior que representan los procesos de entendimiento que se llevan a cabo, por una parte, en la forma institucionalizada de

deliberaciones en las cámaras parlamentarias y, por otra parte, en la red de comunicación de la esfera política de la opinión pública” (Habermas, 1999: 242).

La esfera pública se revela así como el nuevo escenario de la aparición de esta “intersubjetividad de orden superior”, núcleo de la concepción discursiva de la democracia según Habermas. Creemos que todo lo anterior se encuentra en el trasfondo de la concepción que el propio Habermas tiene de la democracia deliberativa. De lo anterior parecería poder inferirse que en un contexto de una sociedad descentrada, compuesta por subsistemas sociales relativamente autónomos, donde no se verifican como viables ni la propuesta liberal ni la republicana por su carácter reduccionista, y donde cobra particular importancia una intersubjetividad plasmada en la esfera pública, sólo es posible un planteo procedimental. O por lo menos, es la perspectiva procedimentalista la que parecería tener más chances de resolver los problemas de integración social en contextos como el mencionado. Con todo, el procedimiento aparece como la estrategia de legitimidad que está implícita en la propuesta del filósofo alemán. En el ensayo “Tres modelos normativos de democracia” puede leerse:

“Con la teoría discursiva entre de nuevo en juego una idea distinta: los procedimientos y presupuestos comunicativos de la formación democrática de la opinión y de la voluntad funcionan como las más importantes esclusas para la racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración sujetos al derecho y a la ley. Racionalización significa más que mera legitimación, pero menos que constitución del poder. El poder disponible de modo administrativo modifica su propia estructura interna mientras se mantenga retroalimentado mediante una formación democrática de la opinión y de la voluntad común, que no sólo controle *a posteriori* el ejercicio del poder político, sino que, en cierto modo, también lo programe.” (Habermas, 1999: 244)

El problema de la legitimidad –tal como aparece en el fragmento citado– se enfoca de manera distinta. Los procedimientos para la formación de la voluntad apelan a una racionalización de las decisiones de un gobierno. Esto parece confirmarse en otro texto, *Facticidad y validez*...

“La generación del poder legítimo mediante política deliberativa representa, como hemos visto, un procedimiento para resolver problemas, que ha menester saber y de la elaboración de ese saber, a fin de programar la regulación de los conflictos y la persecución de fines colectivos. La política viene a ocupar los huecos funcionales que se abren por sobrecarga de otros mecanismos de integración social. Para ello se sirve del lenguaje del derecho. Pues el derecho es un medio a través del cual las estructuras de reconocimiento recíproco que nos resultan conocidas por las interacciones simples y por las relaciones cuasinaturales de solidaridad, pueden transferirse de forma abstracta, pero vinculante, a los ámbitos complejos y crecientemente anónimos de una sociedad funcionalmente diferenciada.” (Habermas, 1998: 396)

En ambos fragmentos parece percibirse lo mismo. El procedimiento está en condiciones de proveer mejores condiciones para la resolución de los conflictos y la racionalización del poder del Estado. No parece haber referencias a la necesidad de criterios externos de corrección, pero tampoco se trata de una deliberación espontánea: se vincula necesariamente con los espacios parlamentarios y la esfera pública. Lo que inspira esta concepción de la legitimidad es en el fondo una racionalidad procedimental y discursiva, la cual podría pensarse que responde a criterios propios. Por lo anterior, a la postura de Habermas podríamos catalogarla como bajo el rótulo de una *tesis de legitimidad procedimental racional*.

Deliberación e igualdad en Christiano.

Nos centraremos ahora en el modelo propuesto por Thomas Christiano. Al comienzo de su artículo “The Significance of Public Deliberation”, Christiano deja en claro sus objetivos y adelanta su consideración sobre el problema de la democracia deliberativa y el problema de la legitimidad:

“...mientras que la deliberación per se tiene un valor exclusivamente instrumental para realzar la calidad de las decisiones en democracia, la igualdad en el proceso de deliberación pública tiene un valor intrínseco fundamentado en el requisito de justicia.” (Christiano, 1999: 243)

De acuerdo a lo anterior, la deliberación pública no debe agotarse en sí misma, existe la necesidad de apelar a algún principio exterior al mismo proceso de deliberación. En el caso de Christiano, hay que apelar a conjugar el proceso de deliberación con el ideal de igualdad. Para este autor, la deliberación tiene primordialmente un valor instrumental. Debe servir como un medio para tomar decisiones de mayor calidad. Si no sirve para ese propósito, la deliberación carece de valor. Ahora bien, ¿cómo puede la deliberación aumentar la calidad de las decisiones? En la descripción de la deliberación es posible identificar algunas de las características principales que este autor considera valiosas. En primer lugar, la deliberación nos permite una mayor comprensión de los intereses de otros miembros de la sociedad, es posible desarrollar cierto sentimiento de empatía. En segundo lugar, la deliberación puede funcionar como un filtro para dejar de lado las formas de la ignorancia con respecto a los intereses y a la justicia. Por último, esto se lograría si se considera a la deliberación como un mecanismo de *prueba y error*, en el cual se prevé que haya diversidad de puntos de vista para evaluar cualquier perspectiva particular.

La evaluación de la deliberación en el planteo de Christiano (1999) se complementa con la cuestión de la igualdad. Ésta aquí hace referencia a la situación en la que los individuos tienen igual acceso a las condiciones cognitivas necesarias para tomar buenas decisiones para la vida común. Estas condiciones son las que permiten a una persona entender mejor qué es lo que se juega en una decisión, también le permiten discernir la decisión correcta. La participación en el proceso de la deliberación pública es una de las principales condiciones cognitivas (p. 253). En la propuesta de Christiano este requisito es considerado relativo a la justicia: en el contexto de la deliberación, si alguien no tiene voz, está siendo tratado como inferior en la toma de decisiones porque se le está negando la igualdad al acceso a las condiciones cognitivas de dicha toma de decisiones. Así, la igualdad tal como la entiende este autor, es considerada como un requisito de justicia en el proceso de deliberación. De esta situación puede inferirse un requisito de legitimidad: si la deliberación no respeta el requisito de igual acceso a las condiciones cognitivas, no puede haber resultado justo de esa deliberación.

Para garantizar el cumplimiento de este requisito, Christiano propone un Principio de Igualdad Política. Las instituciones de discusión y deliberación afectan la distribución de las condiciones cognitivas del entendimiento entre los ciudadanos. Las instituciones igualitarias están encargadas de distribuir las condiciones cognitivas de la comprensión de manera amplia, mediante esto los individuos aumentan su

entendimiento, así como también los medios para reflexionar sobre los fundamentos y méritos de sus convicciones morales que resultan políticamente relevantes. ¿Cómo es que –se pregunta Christiano– la distribución de las condiciones de entendimiento promueven igualdad? Aquellos que no saben cuáles políticas apoyan sus intereses o su concepción de lo que es mejor no tienen probablemente mucho poder real en comparación con aquellos que sí saben (Christiano, 1999: 257).

Como puede apreciarse, la así denominada igualdad de las condiciones cognitivas para la toma de decisiones es una condición necesaria para realizar la igualdad política. La justicia requiere tal igualdad: la deliberación por sí sola no alcanza, la justicia requiere además que cada uno sea capaz de participar como igual en la deliberación (Christiano, 1999: 258).

En este sentido la legitimidad de las decisiones democráticas, depende tanto de la deliberación pública como del cumplimiento del principio de igualdad política. Las condiciones de igualdad cognitiva y su justa distribución son tan importantes como el proceso de deliberación. Este sentido es el que nos hace pensar una *tesis de legitimidad mixta* que atiende al significado de la deliberación pero que al mismo tiempo tiene como referencia un criterio sustantivo externo de corrección. Ambas instancia parecen estar en un pie de igualdad: la deliberación no se subordina al criterio de igualdad; de ahí la consideración de *mixta*.

III. Consenso, conflicto y legitimidad

En el apartado anterior hemos intentado aclarar algunas cuestiones concernientes a las distintas estrategias de legitimidad en los modelos estudiados. Quedan sin embargo algunas preguntas por responder. Más precisamente, estas estrategias procedimentales de legitimidad, ¿apelan a alguna forma de consenso? ¿Es el consenso una condición de la legitimidad de las decisiones democráticas tomadas en forma deliberativa? Estas preguntas no son ciertamente nuevas en la discusión sobre la democracia deliberativa; con todo, creemos necesario volver sobre ellas y prestar atención a su posible vinculación con el problema de la legitimidad.

Una de las críticas más usuales al modelo deliberativo apunta a su supuesta incapacidad para reconocer la dimensión del conflicto como dimensión irreductible de *lo político*. Por lo tanto, según sus críticos, la deliberación no es sino la búsqueda de un consenso ilusorio y la reducción de la política a una instancia moral. Es en el trabajo de

Chantal Mouffe donde podemos encontrar la articulación de estas críticas. En su escrito, *La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea*, puede leerse:

“...los demócratas deliberativos afirman que sin embargo es posible alcanzar un consenso más profundo que el de un ‘mero acuerdo sobre los procedimientos’, un consenso que podrá calificarse como ‘moral’.” (Mouffe, 2012: 97)

Más adelante:

“La democracia deliberativa proporciona un muy buen ejemplo de lo que afirmaba Carl Schmitt respecto del pensamiento liberal: ‘De modo muy sistemático, el pensamiento liberal elude o ignora el Estado y la política, y se instala en cambio en una característica polaridad recurrente de dos esferas heterogéneas, a saber, la de la ética y la de la economía’. De hecho, frente al modelo agregativo, inspirado en la economía, la única alternativa que los demócratas deliberativos pueden ofrecer es la de reducir la política a la ética.” (Mouffe, 2012: 112)

Frente a estas aseveraciones surge inevitable la pregunta: ¿es la democracia deliberativa un intento de reducir la política a la moral mediante la búsqueda del consenso? Creemos que no es el caso. Si atendemos a los textos de los propios deliberativistas podemos encontrar no sólo una referencia clara a la cuestión del conflicto, sino también a la imposibilidad (práctica) del consenso y a la valoración del voto como una instancia de decisión política.

Vayamos por partes. Tanto Cohen como Christiano reconocen que el consenso no sería posible del alcanzar y que la misma dinámica de la deliberación –incluso en una situación ideal como es el procedimiento propuesto por Cohen– podría atentar contra la posibilidad de conseguirlo. Thomas Christiano sugiere que

“Lo mejor que podemos hacera para dar con una comprensión de la justicia y del bien común es apelar a un mecanismo de ‘prueba y error’ donde una diversidad de puntos de vista está siempre presente para testear cualquier perspectiva particular. Por lo tanto, *no debemos apuntar al consenso en asuntos políticos y*

morales. En la medida en que la discusión sirve como un filtro para los errores de ignorancia, puede ayudar tanto a los individuos como a la sociedad, como así incrementar la cantidad de desacuerdo presente.” (Christiano, 1999: 250. El destacado es nuestro)

Cohen por su parte sostiene que

“La caracterización precisa de las razones aceptables y su peso apropiado varía de acuerdo a las perspectivas. Por eso, *incluso un procedimiento ideal de deliberación no producirá, en general, consenso*, pero incluso en caso de desacuerdo, y las decisiones sean tomadas por la regla de la mayoría, los participantes pueden apelar a consideraciones que son reconocidas generalmente como portadoras de peso considerable y como una base adecuada para la decisión colectiva, incluso entre personas que desacuerdan acerca del resultado correcto: cuando los participantes limitan sus argumentos a esas razones, el apoyo mayoritario va a contar por sí mismo como una razón para aceptar la decisión como legítima.” (Cohen, 1999b: 414. El destacado es nuestro)

Ahora bien, ¿qué significa este reconocimiento por parte de los deliberativistas de la imposibilidad del consenso? ¿Cómo conjugarlo con la mención a un “consenso racionalmente motivado” que parecen ser el meollo de la democracia deliberativa? Esta contradicción creemos es menos real que aparente y puede, por otra parte, servir para contestar las críticas arriba esbozadas. Todos los deliberativistas reconocen un pluralismo comprensivo irreductible como marca de las democracias contemporáneas. Esta situación imposibilita cualquier instancia real y práctica de arribar a un consenso sobre las decisiones políticas. Sin embargo, la figura del consenso, de acuerdo con nuestra perspectiva, se entendería mejor si la consideramos como un *ideal regulativo* de la acción y no tanto como el objetivo práctico de toda política deliberativa. Esta idea parece estar en algunos teóricos deliberativos. Martí (2006) sostiene incluso que en las democracias existen tres principios de toma de decisiones: el principio del voto, el de la negociación y el de la deliberación. Y, por lo tanto, “[d]ebemos aceptar que nunca existirá una democracia que se base puramente en la deliberación, ni una que se base en la negociación o el voto puros. En toda democracia real existirán rasgos de los tres tipos ideales de procedimiento” (p. 51). Desde esta

perspectiva la crítica a una *moralización* de la política no parecería tener demasiado asidero. La democracia deliberativa reconoce el conflicto, reconoce la negociación, reconoce la necesidad del voto y reconoce, por último, la imposibilidad de un consenso. A lo que apunta es a tratar de generar alguna preponderancia del principio de deliberación como estrategia para dotar de mayor legitimidad a la toma colectiva de decisiones.

Contrariamente a lo que puede suponerse, la democracia deliberativa deja un considerable espacio para el voto. Cohen (1999a) sostiene que cuando el consenso sea inconseguible debe optarse por la regla de la mayoría. Sin embargo, esto no descarta la distinción entre formas deliberativas de toma colectiva de decisiones y formas que agregan preferencias no deliberativas (p. 77). Asimismo, existe la convicción de que los resultados de una votación entre aquellos que están comprometidos a encontrar razones que sean persuasivas para todos posiblemente difieran de los resultados de una agregación que procede en ausencia de ese compromiso. En consonancia con este punto, Christiano sostiene que si bien las funciones de control del voto tienen un valor independiente de la deliberación pública, éstas son mejoradas cuando son acompañadas por la deliberación entre iguales en la sociedad. La función de la deliberación no puede realizarse si el poder del voto no está ampliamente distribuido (Christiano, 1999: 250).

“Primero, un punto de vista lógico: uno no delibera si no está tomando una decisión, y *nosotros* no deliberamos a menos que cada uno de nosotros participe en la toma de esa decisión. (...) Segundo, es porque los ciudadanos tienen el poder del voto que tiene razón para contribuir a la deliberación pública. (...) De esta manera el mecanismo de votación tiene un impacto independiente en la justicia de la sociedad (a través del poder de control y señalamiento) como también en el carácter de los ciudadanos, y es necesario para la eficacia e incluso la existencia de la de deliberación pública.” (Christiano, 199: 251)

Luego de estas aclaraciones estamos en condiciones de retomar las preguntas que formuláramos al principio de este apartado. Las propuestas de legitimidad deliberativa de los autores tratados, ¿apelan al consenso? ¿Es el consenso una condición de la legitimidad de las decisiones democráticas en los planteos tratados? Como pudimos notar más arriba, las distintas estrategias de legitimidad deliberativa no apelan al consenso para lograr legitimidad. El consenso en las mismas se mantiene cercano a

un ideal regulativo, como un horizonte de normatividad que esta propuesta no abandona, pero que no considera como condición necesaria y suficiente para dar cuenta de las decisiones colectivas democráticas tomadas en términos deliberativos.

IV. Límites del procedimentalismo

En las páginas precedentes hemos señalado algunas de las estrategias precisas de la legitimidad deliberativa, sobre todo, en su variante procedimental. Hemos tratado de destacar también cómo las distintas variantes del procedimentalismo deliberativo abordan el problema del conflicto, cuestionando la objeción según la cual la democracia deliberativa requiere de una instancia consensual para dar cuenta de la legitimidad de las decisiones. No todas las versiones de las democracias deliberativas apelan a la misma forma de procedimiento y ninguna considera al consenso una condición necesaria para declarar legítima a una decisión. Llegados a este punto evaluaremos críticamente las posiciones de cada una de las posturas que hemos analizado previamente. Las preguntas que intentaremos responder son, ¿alcanza con estrategias meramente procedimentales para garantizar la legitimidad de las decisiones políticas deliberativas? ¿Es necesario algún criterio independiente al procedimiento que contribuya a aumentar el nivel de legitimidad de las decisiones colectivas?

El caso más puramente procedimentalista lo encontramos en Cohen, sobre todo en la parte de su propuesta que hemos dado en catalogar bajo el rótulo de *tesis fuerte de la legitimidad procedimental*. De acuerdo con esta perspectiva, la legitimidad emana de la deliberación y no existen restricciones sustantivas más allá de algunas precisiones al procedimiento. Esta cuestión queda clara en un fragmento que encierra más importancia de lo que aparece a primera vista. Al enunciar la segunda característica principal de la democracia deliberativa Cohen dice:

“Los miembros de la asociación comparten (y es de público conocimiento el hecho de que comparten) la perspectiva de que los términos apropiados de asociación proveen el marco para o son el resultado de su deliberación.” (Cohen, 1999a: 72. Las cursivas son nuestras)

Creemos que la disyunción planteada en la cita reproducida puede aludir a dos funciones para la deliberación. De acuerdo con lo anterior, la deliberación puede estar

en el origen de los términos apropiados para la asociación o bien que los términos de asociación son un marco para que la deliberación tenga lugar. La primera opción daría a la deliberación un lugar más radical en la toma de decisiones: los términos mismos de la asociación serían objeto de la deliberación y en este caso cabría preguntarse qué tipo de deliberación se trata, en qué instituciones. En la segunda opción, surge el problema contrario: si los términos de asociación proveen el marco para la deliberación, ¿cómo se llegó a un acuerdo acerca de esos términos? En cualquier caso, no podemos preguntar cómo garantizar unos términos justos de asociación sin apelar a criterios externos. Si bien hay que aclarar que Cohen mismo en este artículo propone una deliberación orientada al bien común y un requisito de razonabilidad en la presentación de razones (Cohen, 1999a: 76), en su caracterización de la concepción formal de la democracia deliberativa no hay ninguna alusión a criterios allende la propia deliberación para asegurar condiciones de justicia (Cohen, 1999a: 72-73). La confianza en la deliberación parece excesiva.

Cohen vuelve tiempo después sobre la cuestión de la legitimidad deliberativa y la vincula ahora explícitamente con la idea de la libertad de los modernos. A esta postura la denominamos bajo el nombre de la *tesis débil de la legitimidad procedimental*. La deliberación sigue teniendo prioridad en la legitimidad de las decisiones, pero se encuentra condicionada por los principios de inclusión deliberativa, del bien común y de participación. Creemos que es posible encontrar en trabajos anteriores de Cohen la referencia a lo que ahora presenta como principio de inclusión deliberativa o el principio del bien común; sin embargo, el principio de participación agrega algo nuevo. Este principio debería garantizar iguales derechos de participación (derechos al voto, a la asociación y a la expresión política), derechos para acceder a un puesto público, una fuerte presunción a favor de la igual consideración de los votos. Y, por último, un requisito más general acerca de la igualdad de oportunidades para tener influencia efectiva (Cohen, 1999b: 422). La pregunta que surge frente al principio de participación es la siguiente: este principio, ¿sirve para evaluar el resultado de la deliberación o, por su parte, sólo regula las condiciones de la deliberación? Este principio termina funcionando como un condicionante, digamos, *a priori* de la deliberación: intenta establecer las condiciones justas en las que debe darse la deliberación, no se pronuncia sobre el resultado de la misma. Su alcance, si bien importante y con incidencia en la cuestión de la legitimidad, es más bien limitado. En

esta perspectiva, hay que reconocerlo, la confianza en la deliberación si bien todavía alta, está matizada.

A la postura de la legitimidad deliberativa en Habermas la hemos considerado como un exponente de una *tesis de legitimidad procedimental racional*. ¿Qué significa esto? En Habermas la deliberación en el contexto de una esfera pública activa e irrestricta y en el marco de una sociedad descentralizada en sistemas sociales autónomos genera una instancia superior de racionalidad. La propuesta de la democracia deliberativa en Habermas parecería depender de su concepción de la racionalidad comunicativa como manifestación del pensamiento posmetafísico. El procedimentalismo –parecería decir el filósofo alemán– enmarcado en la caracterización que hace de la sociedad contemporánea e inspirado en los planteos posteriores a los de una filosofía de la conciencia implica ya de por sí estándares de corrección racional que contribuirían a la resolución de conflictos. El procedimentalismo de la democracia deliberativa implica un nivel racionalidad particular: racionalidad que opera desde el interior del procedimiento de formación de la voluntad y que, al parecer, alcanza para garantizar la legitimidad de los resultados. O incluso: la racionalidad del procedimiento es lo que otorga legitimidad a los resultados. En este sentido entendemos la ya citada expresión:

“Racionalización significa más que mera legitimación, pero menos que constitución del poder.” (Habermas, 1999: 244)

Quedan sin embargo algunas preguntas por responder. ¿Puede la racionalización excluir argumentos no razonables? ¿Con qué criterios? Habermas no hace referencia a la cuestión de los criterios o la cuestión de este tipo de argumentos.

Por último queda la opción de Thomas Christiano. Debido a la igual consideración que otorga a la deliberación como a un principio de igualdad política, hemos denominado a su postura como perteneciente a la *tesis de legitimidad mixta*. Ahora bien, tal vez sea posible preguntarse cuál es la diferencia entre la *tesis de la legitimidad mixta* y la *tesis débil de la legitimidad procedimental*. Es decir, cuál sería la diferencia entre el principio de participación de Cohen y el principio de igualdad política de Christiano. ¿No apuntan ambos a establecer condiciones para la deliberación política? La diferencia entre ambos radica en el hecho de que si para el primero el principio de participación hacía referencia a condiciones externas a la deliberación, el

principio de igualdad política y, sobre todo, el requisito de la igual distribución de las condiciones cognitivas alude al propio procedimiento deliberativo. No es lo mismo la mera participación (como intentaría garantizar el principio de participación de Cohen) que participar en la deliberación intentando garantizar las condiciones de comprensión de los asuntos tratados (como pretende la igual distribución de las condiciones cognitivas de acuerdo con Christiano). Tal vez la postura de Christiano sea la que menos interrogantes planteé si la comparamos con las anteriores, sin embargo, nos animamos a conjeturar que tal vez una consideración más decididamente epistémica pueda mejorar incluso la propuesta.

V. Conclusión

En las páginas anteriores hemos intentado bosquejar algunos de los modelos de legitimidad deliberativa más representativos. Éstos se caracterizan por un especial acento en la cuestión procedimental al dar cuenta de la legitimidad. Hemos intentado aclarar algunas dudas con respecto a la cuestión sobre la relación entre legitimidad y consenso y hemos, finalmente, intentado proponer una valoración crítica de las diversas posturas.

El procedimentalismo mientras más espacio deja libre para la deliberación como criterio último de legitimidad, más problemático se vuelve determinar los alcances de la propia deliberación (*tesis fuerte de la legitimidad procedimental*). Por otro lado, la racionalidad interna de la deliberación (*tesis de la legitimidad procedimental racional*) no alcanza para garantizar una efectiva exclusión de los argumentos no razonables. Finalmente, cuando el procedimiento se acerca más a un criterio externo de corrección es cuando ciertas cuestiones de justicia parecen estar más seguras, sobre todo las tocantes a la igual participación efectiva en la deliberación (*tesis de la legitimidad mixta*). Ciertamente, la propuesta de un criterio de corrección entraña problemas específicos, sobre todo, cómo justificar tal criterio.

VI. Bibliografía

Christiano, T. (1999) "The Significance of Public Deliberation" En J. Bohman y W. Rehg, *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology

Cohen, J. (199a), “Deliberation and Democratic Legitimacy” En J. Bohman y W. Rehg, *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology

Cohen, J. (199b), “Procedure and Substance in Deliberative Democracy” En J. Bohman y W. Rehg, *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology

Habermas, J. (1996), “Tres modelos normativos de democracia” En J. Habermas, *La inclusión del otro. Estudios de teoría política* (pp. 231-246), Barcelona: Paidós

Habermas, J. (1998), *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*, Madrid: Trotta

Martí, J.L. (2006), *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Madrid: Marcial Pons

Mouffe, C. (2012), *La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea*, Barcelona: Gedisa

Peter, F. (2009), *Democratic Legitimacy*, New York: Routledge